



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, cuatro de agosto de dos mil veintitrés

E22-006

REFERENCIA: ejecutivo laboral- APELACIÓN AUTO
EJECUTANTE: **Herederos de SEBASTIÁN ACOSTA RODRÍGUEZ**
EJECUTADO: **COLPENSIONES**
RADICADO: 05001-31-05-001-2019-00670-01
DECISIÓN: **CONFIRMA** auto que declara nulidad

Link: [E22-006 \(001-2019-00670\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín a través de la cual no sólo declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 15 de noviembre de 2019 (mandamiento de pago), sino además que rechazó la demanda ejecutiva por ausencia total de poder.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 26** de discusión, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2016 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a COLPENSIONES del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y los intereses moratorios, pero accedió a la pretensión subsidiaria condenando a la entidad demandada a pagar al señor SEBASTIAN ACOSTA RODRIGUEZ la suma de **\$38.154.041** por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la cual debía ser indexada al momento del pago. Fijó como agencias en derecho en la suma de **\$3.815.000**.

- Tal decisión fue confirmada el 13 de junio de 2018 por este tribunal, instancia en la que se fijaron las agencias en derecho en la suma de **\$781.242**
- El noviembre de 2019, la Dr. María Teresa Gaviria Echandía, quien en el proceso ordinario fungió como apoderado del demandante, solicitó se librara mandamiento de pago por las sumas antes aludidas, más la indexación e intereses moratorios.
- Fue así como mediante auto del 15 de noviembre de 2019 se libró mandamiento en los términos pretendidos, no así respecto de los intereses solicitados, oportunidad en la que se decretó el embargo de una cuenta propiedad de Colpensiones. Posteriormente se notificó a la entidad, quien propuso excepciones.
- El 28 de agosto de 2018 se puso en conocimiento de Colpensiones que el demandante había fallecido, allegando el correspondiente **Registro Civil de Defunción según el cual tal hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2018**. (fl. 40 archivo 01 contentivo del expediente ordinario)
- Posteriormente se allega al plenario poder otorgado a la Dra. María Teresa Gaviria el 11 de marzo de 2020 por la señora Marina del Socorro Acosta de Guinand, en su condición de tía y heredera única de Sebastián Acosta Rodríguez, con el fin de llevar hasta su culminación el proceso ejecutivo conexo laboral, acompañando tal documento de una declaración extra-juicio en la que la mandante aseveró ostentar dicha calidad, aduciendo además que su sobrino era soltero, sin unión marital de hecho, y no procreó hijos.
- El 14 de diciembre de 2020 el juzgado de origen no sólo declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 15 de noviembre de 2019 (mandamiento de pago), sino además que rechazó la demanda ejecutiva por ausencia total de poder (archivo 6), decisión contra la que se interpuso y sustentó recurso de apelación.
- El recurso fue concedido el 14 de septiembre de 2021 y el expediente fue remitido a esta corporación en enero de 2022.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ AL DECIDIR

Recalcó que mediante auto del 4 de marzo de 2020, después de estudiar el expediente administrativo, advirtió que el señor SEBASTIÁN ACOSTA RODRÍGUEZ había fallecido desde antes de promoverse la ejecución, situación que su apoderada omitió informar y por lo que no contaba con

poder para promoverla. Que con el fin de intentar sanear la causal de nulidad contemplada en el numeral 4 del artículo 133 del CGP, requirió a dicha apoderada para que realizará lo siguiente:

1. Aportase nuevo poder otorgado por los herederos del señor ACOSTA RODRÍGUEZ.
2. Incluyese en el poder la manifestación de estos herederos en el sentido de no conocer otros posibles.
3. Incluyese en el poder la convalidación de lo actuado.
4. Anexase al poder la documentación que acreditará la calidad en que actúa el heredero o herederos.

Que a través de memorial presentado el 13 de marzo de 2020, la apoderada adujo que cumplió con lo requerido, pero que revisado el poder encontraba que el mismo había sido otorgado por MARINA DEL SOCORRO ACOSTA DE GUINAND, pero ni se indicaba que convalidaba lo actuado y tampoco allegó documental suficiente para acreditar la calidad, sólo su registro civil de nacimiento, quien por demás se identificaba como la tía del fallecido, sin aportar el registro civil de nacimiento del respectivo padre o madre, ni del señor SEBASTIÁN, documentos necesarios para acreditar el parentesco.

No obstante, precisó que de acuerdo a lo normado en los artículos 1045 a 1051 del Código Civil, los hermanos de los padres no se encontraban en ningún orden hereditario y la señora MARINA no invoca derecho de transmisión o representación, mucho menos lo acreditaba.

Por lo anterior, al no cumplirse lo requerido, concluyó que NO se podía sanear el trámite, declarando la nulidad de todo lo actuado desde el auto que libró mandamiento de pago, inclusive, consecuencialmente rechazando la solicitud de ejecución y ordenando el archivo del expediente.

3. RECURSO DE APELACIÓN EJECUTANTE

Expresamente indicó que:

Con fecha del 14 de diciembre de 2020 y por auto Interlocutorio que apenas el 18 de agosto hogaño se le notifica a las partes de manera virtual (observando la página judicial), nos damos cuenta que la penúltima actuación del Juzgado a cargo de la Causa, fue el 18 de noviembre de 2020 cuando se comparte digitalmente el Proceso a las partes, advirtiéndose que “por auto del 4 de marzo de 2020, después de estudiar el expediente administrativo del señor SEBASTIÁN ACOSTA RODRÍGUEZ, se advirtió que el mismo había fallecido desde antes de promoverse la ejecución, situación que su apoderada omitió informar y por lo que no contaba con poder para promoverla, ello llevó a que con el fin de intentar sanear la causal de nulidad del artículo 133.4 del CGP se requiera a dicha apoderada para que realizará lo siguiente: 1. Aportase nuevo poder otorgado por los herederos del señor AFCOSTA RODRÍGUEZ. 2. Incluyese en el poder la manifestación de estos herederos en el sentido de no conocer otros posibles. 3. Incluyese en el poder la convalidación de lo actuado. 4. Anexase al poder la documentación que acreditara la calidad en que actúa el heredero o herederos. ...”

Cierto es que el 13 de marzo de 2020 se envió por Apoyo Judicial oficio que contenía una relación con documentación fidedigna y que no admite duda alguna para lo que se reclama: esos documentos son el Poder otorgado (AUTÉNTICADO); Copia auténtica de declaración extra juicio de heredero único (LO QUE DA MUESTRA DEL PARENTESCO DE LA RECLAMANTE); Copia de cédula de la heredera (MÁS CONTUNDENTE); Registro civil de Nacimiento de la heredera (EN EL AUTO DICE QUE NO); Comunicado de Colpensiones del 30 de septiembre de 2019 (NO ENTENDEMOS POR QUÉ NO SE HA CANCELADO LO ADEUDADO); Copia de Poder debidamente otorgado para trámites de pago a herederos ante Colpensiones (TANTO EN EL PROCESO COMO EN COLPENSIONES FIGURA TODO PARA EL PAGO); Copia de cuenta de cobro como pago a herederos radicada en Colpensiones (QUE OTRA PRUEBA SE NECESITA ENTONCES); Copia de entrega de documentos a Colpensiones del 23 de julio de 2018.

Así las cosas, sabido es la deuda que tiene COLPENSIONES para el pago correspondiente. El Juzgado de la Causa ordenó el pago a que había lugar y que hasta la saciedad hemos probado y comprobado. Así que no entendemos porque tanto tiempo después (INCLUSIVE AÑOS), no se ha producido el pago, por eso suplicamos al Juzgado que se acceda a lo pedido.

Es así como solicita se revoque la decisión de la a quo.

4. ALEGATOS

Únicamente se pronunció Colpensiones aduciendo que compartía la decisión adoptada por el juzgado, toda vez que el señor Sebastián Acosta Rodríguez, quien en vida se identificara con cédula de ciudadanía No. 1.146.439.030, falleció el 8 de septiembre de 2018, deceso que se dio previo a instaurarse la demanda ejecutiva pues fue radicada el 15 de noviembre de 2019, razón por la que la profesional en derecho debió presentar poder que la facultase para representar los intereses de aquellas personas que se constituyeran como herederos del causante. Que sin embargo y pese a que en el expediente obraba poder otorgado por la señora Marina del Socorro Acosta de Guinand, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.415.642, con él no se allegaron los documentos que dieran cuenta del parentesco que tuviera aquella con el causante, por ello y pese al intento realizado por el Juzgado de conocimiento para sanear la posible nulidad que pudiese recaer sobre el proceso, la apoderada de la parte demandante no cumplió con la carga impuesta, motivo por el cual, la consecuencia procesal era dar aplicación inmediata a los planteamientos normativos establecidos en el artículo 133 numeral 4 del Código General del Proceso, según el cual el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: ... *Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*

Que de acuerdo con lo anterior, era claro que la causal de nulidad invocada por el despacho estaba plenamente demostrada, razón por la que solicita se confirme todo lo decidido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín en Auto del 14 de diciembre de 2020, notificado por estados el 19 de agosto de 2021, condenándose en costas a la demandante por la no prosperidad del recurso.

5. PROBLEMA JURÍDICO

Se centra en determinar si se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 4 del art. 133 del CGP según la cual el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando *es indebida la representación de alguna de las partes*.

6. CASO EN CONCRETO

Sea lo primero precisar que de acuerdo a los numerales 2º y 6º del art. 65 del CPT y la SS, son apelables los autos proferidos en primera instancia que rechacen la representación de una de las partes y los que decidan sobre nulidades procesales, siendo ello lo que precisamente ocurre en este caso.

Aclarado lo anterior, tenemos que a voces de la a quo, se configuró una nulidad por actuar careciendo íntegramente de poder conforme lo normado en el numeral 4 del art. 133 del Código General del Proceso, cuyo tenor es:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, **o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder**.(...)” (subrayas y negrillas de la Sala)

Ya lo explicaba el doctrinante Hernán Fabio López Blanco en su obra *Código General del Proceso Parte General*¹ cuando al referirse a esta causal de nulidad, explicó que:

Esta causal se refiere **al aspecto de la representación, tanto de la legal**, o sea aquella a la que están sometidos los incapaces, las personas jurídicas y los patrimonios autónomos, **como de la judicial, aun cuando en este caso se configura tan solo por carencia total de poder para el respectivo proceso, lo que de entrada ubica la circunstancia como de casi imposible estructuración, dado que requiere la “carencia total de poder” y si así sucede, simplemente no existe el acto de apoderamiento de manera que es sencillo determinar e impedir que intervenga como apoderado judicial quien carece de poder o, al menos no lo acredita documentalmente en el proceso**, lo que deja a salvo la circunstancia de que se podrá analizar esa intervención desde la estrecha óptica de la agencia oficiosa.

Dado que la carencia total de poder configura la causal sería antijurídico invalidar la actuación cuando ésta ha sido adelantada por abogado que tuvo poder, pero no amplio y suficiente para determinados aspectos, por ejemplo, sólo se le facultó para actuar en primera instancia y lo continuó haciendo en segunda.

La causal también obra en el campo de la llamada capacidad procesal y se presenta cuando un incapaz actúa directamente sin su representante o por intermedio de quien no lo

¹ DUPRE Editores 2016. Páginas 930, 931 y 974.

es, o cuando una persona jurídica comparece por intermedio de quien no es su representante de acuerdo con la ley o los estatutos o lo hace el patrimonio autónomo por intermedio de quien no es el llamado a representarlo.

Si en un juicio se presentan circunstancias como la anotada, el juez debe proveer, bien a petición de parte o de oficio y solicitar a la autoridad encargada de dar la prueba de representación, que la aduzca.

(...) Este presupuesto procesal se encuentra regulado como causal de nulidad en el art. 133. Lo anterior **indica que cuando el juez se encuentre**, antes de dictar sentencia, ante un caso de falta de capacidad procesal, que se origina en una indebida representación, no debe hacer otra cosa que declarar la causal de nulidad, si llegare el caso, previo el trámite previsto para permitir la posibilidad de saneamiento y no dictar sentencia inhibitoria, porque al hacerlo se coarta la posibilidad de convalidar la nulidad.

(Resaltos de la Sala)

Nótese como el legislador exigió, para efectos de aplicar lo allí previsto, que el apoderado careciera **íntegramente de poder**. Y esta precisión resulta de gran importancia si tenemos en cuenta, que ante el fallecimiento del demandante, quien era titular de un derecho dado la firmeza de una sentencia que así lo declaró, se puso fin al mandato.

Y es que según el Registro Civil de Defunción que obra en el plenario, el primigenio demandante, señor Sebastián Acosta Rodríguez falleció el día 8 de septiembre de 2018 y la demanda ejecutiva laboral, entendida como la solicitud de librar mandamiento, tan solo se impetró en noviembre de 2019, es decir, con posterioridad al fallecimiento de aquel titular.

Por tanto, es claro que para esa anualidad la abogada María Teresa Gaviria Echandía carecía de poder para dar curso al proceso ejecutivo laboral pues si bien el señor ACOSTA RODRIGUEZ le otorgó poder en julio de 2014, con la muerte de aquel se puso fin al mandato, en los términos del inciso 5º artículo 76 del Código General del Proceso que reza:

“ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER.

(...)

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial **si ya se ha presentado la demanda**, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores (...)” (subrayas y negrillas de la Sala)

Y tal es la consecuencia legal toda vez que, se insiste, NO se había iniciado el proceso ejecutivo; empero, en gracia de discusión, cuestionable resultaría la discusión relativa a que aquel poder inicial facultase a la profesional del derecho para solicitar la ejecución de la obligación a cargo de Colpensiones, dado que, en parte alguna de aquel documento, se extiende las facultades de representación a un proceso ejecutivo laboral, así:

Referencia: Otorgamiento de poder.

SEBASTIAN ACOSTA RODRIGUEZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Medellín, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.146.439.030, me permito mediante este escrito otorgar poder especial a **RAMIRO , GAVIRIA DIEZ y MARIA TERESA GAVIRIA ECHANDÍA**, quienes son Abogados Titulados Inscritos y en ejercicio, identificados como aparece al pie de sus firmas, para que en mi nombre inicien y lleven hasta su culminación Proceso Laboral Ordinario de Doble Instancia en contra de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, antes **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**, Entidad representada legalmente por el Dr. **MAURICIO OLIVERA GONZALEZ**, o por quien haga sus veces en el momento de la notificación, para que la citada entidad sea obligada a pagar a mi favor: **LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES** y como pretensión subsidiaria **LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIONES DE SOBREVIENTES** en caso de no prosperar la principal a que tengo derecho por la muerte de mi padre **FERNANDO DE JESUS ACOSTA ARCILA**, quien en vida se identificaba con la cédula número 8.297.612; deberá condenarse a la entidad demandada a pagar: todas las mesadas pensionales desde la fecha del fallecimiento, las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, los intereses moratorios a que haya derecho a partir de la primera mesada dejada de cancelar (art 141 de la Ley 100 de 1993) y por las futuras, por las costas y gastos del proceso. En caso de no prosperar la pretensión de los intereses moratorios por no pago de las mesadas pensionales, se deberá condenar a la demandada al pago de la ejecución de los dineros producto de las condenas, esto como pretensión subsidiaria.

Los apoderados quedan ampliamente facultados para conciliar, recibir, transigir, desistir, sustituir, resumir, recibir los dineros productos de las condenas, interponer recursos y ejecutar.

Sírvase reconocerle personería a los profesionales del derecho

Aterramiento,

SEBASTIAN ACOSTA RODRIGUEZ
C.C. 1.146.439.030

del cto. med. her. laboral
Sebastian Acosta Rodriguez
1.146.439.030

Así las cosas, como la persona natural llamada a ejercer ese derecho de acción, falleció antes de que se hubiera presentado la demanda ejecutiva, es claro que cuando esta se radicó, la abogada carecía de poder, configurándose una nulidad en los términos del numeral 4 del artículo 133 del Código General del Proceso, ya referenciado.

Ahora, loables fueron los esfuerzos de la a quo, quien como directora del proceso y ejerciendo ese control de legalidad en los términos del art. 132 del mismo estatuto procesal, intentó subsanar aquella patología procesal (máxime si ya se había materializado un embargo e incluso la entidad había expedido resolución de cumplimiento), solicitando que quienes por ley son llamados como sucesores procesales, otorgaran un nuevo poder convalidando lo hasta ahora actuado.

Y es ahí donde el problema jurídico adquiere otros matices y pasa a cuestionarse la capacidad de la señora Marina del Socorro Acosta de Guinand, en su condición de tía y heredera única, para representar los intereses del causante Sebastián Acosta Rodríguez, dado que, al margen de NO acreditar aquel parentesco, ningún orden sucesoral la facultaría para representar la masa hereditaria.

Recuérdese en este punto lo previsto en el art. 68 del CGP al indicar que:

ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. <Inciso modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> **Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.**

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurren.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente. (Resaltos propios)

Sobre la aludida institución jurídica la Corte Constitucional mediante sentencia T-553 de 2012 señaló que:

(...) conforme a la doctrina, esta figura procesal **no constituye una intervención de terceros**, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o quienes actúan en calidad de intervinientes (...) Adicionalmente, se advierte que esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Además, el sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. Aunque, el sucesor tiene el deber adicional de presentarse al proceso para que el juez le reconozca su calidad.

Como el fallecido NO es sujeto de derechos, su condición de parte se transmite por ministerio de la ley estén llamados a ocupar su lugar.

Bajo esta óptica, la sucesión procesal NO implica la intervención de un tercero como si existiese una relación jurídica subyacente, solo constituye un remplazo o cambio de personas que componen una de las partes procesales ocupando la misma posición de quien fallece al acreditar a través del medio probatorio idóneo, la condición de heredero o sucesor del fallecido.

Destáquese pues como la señora Marina del Socorro Acosta, persona que aquí otorga poder a la profesional del derecho en aras de subsanar cualquier falencia, ciertamente ni es la cónyuge del causante, ni la albacea con tenencia de bienes, tampoco curadora o HEREDERA.

Partiendo de la veracidad de la afirmación que se plasma en la declaración extra-juicio, que NO es prueba idónea del parentesco, dado que los correspondientes registros civiles serían los documentos que por ley acreditarían dicho vínculo (prueba ad substantiam actus o ad solemnitatem), lo cierto es que una tía, entiéndase hermana del padre o la madre del causante, por ley NO ostenta la calidad de heredera.

Los órdenes hereditarios o sucesorales, definidos como el grupo de personas con vocación hereditaria, están dispuestos organizadamente por la ley y constituyen la secuencia de quiénes heredan al causante, evento en el que se abre el respectivo proceso sucesoral y se vincular por pasiva a todos los herederos determinados e indeterminados. Consúltese para el efecto lo que frente al tema disponen los artículos 1045 a 1051 del Código Civil.

Actualmente los órdenes hereditarios son cinco: el primero es el de los hijos (descendientes); el segundo: de los padres, o ascendientes y el cónyuge; el tercero: lo integran el cónyuge y los hermanos del causante; el cuarto: se compone por los sobrinos y/o hijos de los hermanos; y en el quinto se encuentra el ICBF.

Quiere esto decir que, si se pretendía continuar con la ejecución, era esta última entidad quien debía otorgar poder, y no fue ello lo que ocurrió, claro está, de no existir persona con mejor derecho.

En tal sentido, uno de los principios del derecho procesal es la legalidad de las formas, entendida como un mandato al legislador para que se ocupe de crear normas abstractas de orden público que regulen los procedimientos, pues toda la actividad que se hace en el juicio debe estar prevista en la ley. El procedimiento a su vez es una serie o sucesión de actos procesales secuenciales. Y en virtud de tales postulados el operador jurídico se encuentra sujeto a las *formas propias de cada juicio*, velando de esta manera por el debido proceso, mandato constitucional que se materializa, entre otras formas, a través de lo dispuesto en el art. 133 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral dado que es de aquellos asuntos no regulados expresamente en esta especialidad de la jurisdicción ordinaria, disposición que taxativamente enlista los casos en los cuales es dable declarar una nulidad, la cual tiene como finalidad subsanar los errores que el proceso pueda tener, pues responde a la necesidad de salvaguardar el derecho constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitución Política, el que se ve afectado por la trasgresión grave de los postulados esenciales que lo gobiernan².

Así las cosas, si quien actuó como apoderada judicial carecía íntegramente de poder y además de ello la persona que posteriormente le otorgó poder NO es sucesora procesal, no existe camino diferente a declarar la nulidad de lo actuado, como en efecto sucedió.

² Frente al tema, la Sala de Casación Civil y Agraria, en sentencia del 22 de mayo de 1997, recalcó que: "Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como están de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites inocuos, son gobernadas por principios básicos, como el de especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación"

En consecuencia, atendiendo los razonamientos que preceden, se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que regulan el tema. Sin costas en ninguna instancia.

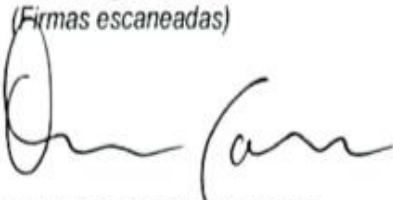
En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 15 de noviembre de 2019, que libró mandamiento de pago, inclusive, y rechazó la demanda ejecutiva por ausencia total de poder, dentro del proceso ejecutivo laboral de SEBASTIÁN ACOSTA RODRÍGUEZ en contra de **COLPENSIONES**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: sin costas en ninguna instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.


Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 135 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 08 DE AGOSTO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>